

GOBIERNOS DE IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

un balance político

BEATRIZ STOLOWICZ
COORDINADORA

JUAN VALDÉS	Cuba
EDGARDO LANDER	Venezuela
JULIO TURRA	Brasil
ANTONIO ELÍAS	Uruguay
HUGO MOLDIZ	Bolivia
GERMÁN RODAS	Ecuador
NIDIA DÍAZ	El Salvador
JUAN CARLOS VARGAS	México
JAIRO ESTRADA	Colombia
CARLOS RUIZ	¿Chile?



Ediciones
Aurora

**PROYECTOS DE
IZQUIERDA Y GOBIERNOS
ALTERNATIVOS. UN
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
COLOMBIANA RECIENTE**

JAIRO
ESTRADA ÁLVAREZ *

A diferencia de los demás países de América Latina, especialmente de Suramérica, en los que la crisis de los proyectos neoliberales provocó una nueva configuración del mapa político de la región con la instalación de un amplio espectro de gobiernos que han sido caracterizados de izquierda o de centroizquierda¹, el caso colombiano se muestra excepcional. Aquí se ha asistido, con el proyecto político de la “seguridad democrática” que encarna el reelecto presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-...), a una profundización de los rasgos autoritarios del régimen político, a una intensificación de la guerra contrainsurgente mediante una estrategia de creciente intervención imperialista norteamericana y a una (aparente) consolidación del proyecto económico del neoliberalismo, con el impulso de las “reformas estructurales” de “segunda generación”; todo ello, al tiempo que se despliegan, con el proyecto político paramilitar en proceso de institucionalización, los componentes criminales del capitalismo y una organización mafiosa de la sociedad.

No obstante, bajo tales condiciones de altísima complejidad y de difícil entendimiento para nacionales y extranjeros, se adelanta, con proyecciones de alternativa y a través de diversas formas, una lucha social y política de resis-

* Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia; director del Grupo interdisciplinario de estudios políticos y sociales; coordinador académico del seminario internacional *Marx vive*; director de la Revista virtual *Espacio crítico*, www.espaciocritico.com.

¹ También se utilizan los calificativos de “progresistas” o “alternativos”. Tales gobiernos han generado un importante debate sobre la perspectiva de la región. Al respecto véanse: Beatriz Stolowicz, “La izquierda latinoamericana y las encrucijadas del presente”, México, D.F., 2006 (mimeo), Atilio Borón, “El mito del desarrollo capitalista nacional en la nueva coyuntura política de América Latina”, Argenpress, 2007; Claudio Katz, “Socialismo o neodesarrollismo”, *Rebelión*, 2006, tomado de www.rebellion.org; Néstor Kohan, “La gobernabilidad del capitalismo periférico y los desafíos de la izquierda revolucionaria. Crisis orgánica y revolución pasiva: el enemigo toma la iniciativa”, Argenpress, 2006.

cia muy importante y valerosa que se ha visto alentada precisamente por los cambios políticos ocurridos en la región. Lo que desde el exterior —y aún desde el interior del país— se aprecia como un proyecto político y económico de neoliberalismo renovado, sólido y consistente, muestra —en sentido estricto— claras tendencias de erosión y de descomposición, que abren un amplio juego de posibilidades que van desde la reconstitución del régimen (con operaciones de autopurificación y limpieza) hasta la generación del espacio para un proyecto político alternativo de izquierda. Un acercamiento a las posibilidades de la izquierda en Colombia resulta, por esa razón, del mayor interés. Ése es, en buena medida, el propósito principal de este trabajo.

En desarrollo de ese propósito, el presente artículo se ha estructurado en tres partes. En la primera, se presentan las que podrían denominarse piezas del rompecabezas colombiano. Aquí se trata de mostrar cómo el proyecto capitalista neoliberal en Colombia se manifiesta de manera descarnada, articulando el discurso de la “democracia liberal” y el “libre mercado”, con una tendencia fuerte al autoritarismo, el intervencionismo norteamericano, la intensificación de la guerra y la consolidación de rasgos mafiosos y criminales de la formación socioeconómica. En la segunda, tomando semejante complejidad como referente contextual, se aborda el estudio de las posibilidades de la izquierda colombiana, considerando dos planos del análisis: por una parte, se intenta una aproximación a un balance político preliminar de lo que podría definirse como *gobiernos alternativos locales*, examinados a partir de varias trayectorias: a) los proyectos de “poder popular” de la insurgencia armada; b) los gobiernos locales de la Unión Patriótica; c) el gobierno local del Bloque Social Alternativo en el departamento del Cauca (2001-2003), y d) el gobierno de Luis Eduardo Garzón en la ciudad capital, Bogotá, (2005-2007)². Por otra parte, se muestran las perspectivas actuales a partir de las reconfiguraciones ocurridas en el campo de la izquierda colombiana durante los primeros años de este siglo; en particular se somete a examen el proyecto político del Polo Democrático Alternativo. Por último, en la tercera parte, se presentan algunas conclusiones del trabajo.

LAS PIEZAS DEL ROMPECABEZAS COLOMBIANO

El examen a la situación colombiana se asemeja a la armada de un rompecabezas. Piezas sueltas, a veces ininteligibles (en apariencia), que cuando se

² El caso del gobierno de Angelino Garzón (2005-2007) en el Departamento del Valle, pese a ser catalogado equivocadamente como un gobierno alternativo, no se aborda dado su indiscutible acercamiento al gobierno de Uribe Vélez.

van articulando, adquieren sentido y muestran una imagen de la complejidad. La imagen que aquí se intenta mostrar parte de la consideración de varias de ellas: las configuraciones recientes del proceso de acumulación y del régimen político; el intervencionismo norteamericano y la intensificación de la guerra; los rasgos criminales y mafiosos de la formación socioeconómica, así como su institucionalización durante el gobierno de Uribe Vélez.

Profundización del proyecto neoliberal y creciente autoritarismo

En lo corrido del nuevo siglo, contrariando la tendencia general reciente de América Latina, en Colombia se ha asistido a una profundización del proyecto neoliberal; se ha dado continuidad a las transformaciones capitalistas iniciadas hace dos décadas, que adquirieron una mayor programación sistemática y consistencia institucional a partir del gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994). Desde entonces, la línea ha seguido los trazos (con algunos altibajos) de las políticas del Consenso de Washington. Tales políticas fueron reforzadas al finalizar la década de 1990, cuando se firmara el primero de los tres acuerdos que desde entonces habrían de pactarse con el Fondo Monetario Internacional³.

Tanto las políticas de liberalización y desregulación económica, como las de reestructuración neoliberal del Estado, habrían de producir un cambio sustancial en las condiciones generales de la reproducción capitalista, provocando una transformación estructural del mayor significado en el balance entre los fondos de acumulación y los fondos sociales de consumo. De la misma forma que en otros países, la precarización generalizada del trabajo y el deterioro sistemático de sus condiciones de reproducción se han visto acompañados de una nueva fase de prosperidad capitalista que, en todo caso, ha producido reacomodos entre las facciones capitalistas: también en Colombia algunas de ellas se hallan inmersas en lógicas mundiales de acumulación, al tiempo que otras se han visto afectadas por los procesos de reestructuración capitalista.

De particular importancia para el cambio en el balance acumulación-consumo han sido los “rediseños institucionales”, esto es, la *juridización* del proyecto político y económico neoliberal, la incesante producción de normatividad, con la que se ha pretendido imponer un verdadero “cerrojo jurídico”, que le

³ El primero, un “acuerdo extendido”, se firmó en diciembre de 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002); los otros dos, acuerdos *stand by*, se suscribieron en diciembre de 2002 y mayo de 2004, por parte del gobierno de Uribe Vélez. Dado el estricto seguimiento a las políticas del FMI no fue necesario un nuevo acuerdo en diciembre de 2006.

dé legitimidad y legalidad a las transformaciones capitalistas, atendiendo siempre a las reglas de la “democracia liberal”.

Por ello es que un examen de las tendencias recientes de acumulación en Colombia (si se trata de considerar sus formas legales), pasa inevitablemente por la producción del orden (neoliberal) jurídico económico. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional han sido, en sentido estricto, pactos de agendas legislativas. Siguiendo la línea del Consenso de Washington, los desarrollos legislativos y las tendencias de política económica se han caracterizado en los últimos años por:

- la profundización del proceso de liberalización y re-regulación del mercado de trabajo, mediante un debilitamiento de las instituciones laborales a favor de políticas de “empleabilidad”;
- el rediseño del proceso de descentralización, el cual se basa en la definición de lineamientos claves de política local desde el gobierno central, al tiempo que se transfieren por parte de éste mayores responsabilidades y menores recursos hacia los gobiernos locales;
- la continuación (y culminación) de procesos de privatización en campos en los que tales procesos estaban aplazados o no se habían podido adelantar (petróleo, telecomunicaciones, energía eléctrica, banca);
- la apertura hacia una mayor mercantilización de la naturaleza, a través de la Ley de Bosques que abre fronteras para su explotación comercial;
- el mayor estímulo a la inversión extranjera y, en general, a los flujos de capitales, con la creación de diversos incentivos;
- el reforzamiento de las prescripciones de política económica (de ajuste fiscal selectivo) orientadas a garantizar el pago de la deuda pública y la financiación de la guerra, mediante reformas al Estatuto orgánico de presupuesto y la expedición de la Ley de Responsabilidad Fiscal;
- la afectación de rubros sociales del gasto público (especialmente de educación y salud) mediante el rediseño del régimen de transferencias de finanzas intergubernamentales;
- la implantación de medidas que refuerzan la “focalización” de la política social en los sectores más pobres, al tiempo que deja en desprotección a sectores importantes de la población. Esta política se acompaña de la creación de un sistema clientelista de subsidios a la demanda que, de paso, constituye a esos sectores pobres en base social para la legitimación de la política general.

Un punto culminante de la estrategia de juridización del proyecto político y económico neoliberal en Colombia, luego del fracaso del ALCA, ha sido la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Dicho tratado, como lo señala la experiencia del TICA, al tiempo que profundizará la liberali-

zación y la desregulación de la economía y la extenderá a nuevos campos de la vida económica y social, posibilitará un mayor control económico y político por parte del imperialismo norteamericano y sus empresas transnacionales⁴.

Con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, se reforzó el giro autoritario que venía produciéndose en los últimos años del gobierno de Andrés Pastrana. El fracaso de las conversaciones entre este último y la guerrilla de las FARC, estimuló –junto con otros factores, cuyo estudio escapa a los propósitos de este texto– la formación de un consenso político de las élites dominantes para buscar una salida militar al conflicto social y armado. Dicho consenso se construyó con el respaldo de los principales grupos económicos, los gremios del capital, los principales medios de comunicación, sectores de la Iglesia, sectores mayoritarios del Congreso, las Fuerzas Militares, y fue apoyado por la intelectualidad de derecha; su expresión sería el proyecto de “seguridad democrática” de Uribe Vélez.

El proyecto de “seguridad democrática” descansa sobre cuatro supuestos principales de análisis:

- 1) En Colombia no hay un conflicto social y armado, sino una amenaza terrorista contra la sociedad, que proviene esencialmente de unos grupos de esa naturaleza que se lucran del negocio del narcotráfico. Toda expresión individual u organizada, política o social, que no se alinee con ese entendimiento debe ser considerada en un espectro que va desde la condición de ideólogo hasta la de idiota útil del terrorismo⁵.
- 2) La confrontación exitosa de la amenaza terrorista justifica la limitación –a través de diversos mecanismos– de derechos civiles y políticos, entre otras cosas, por cuanto algunos de los apoyos estratégicos de la subversión armada se encontrarían mimetizados dentro de la población civil. En ese sentido, la vinculación masiva de sectores de la población civil, como

⁴ Al momento de escribir este trabajo, ya se había refrendado por parte del Congreso colombiano el TLC; se encontraba en entredicho su aprobación inmediata en el Congreso norteamericano, debido a la postura del Partido Demócrata que demandaba la inclusión de cláusulas laborales y ambientales, así como el compromiso efectivo del gobierno colombiano con la protección a líderes sindicales y el esclarecimiento del asesinato –por razones políticas– de más de dos mil de ellos.

Al respecto véase el libro del asesor de Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria, *Sofismas del terrorismo en Colombia*, Bogotá, Planeta, 2005, en el que desde una postura de derecha recalcitrante y en una falta de sindéresis se trata de justificar la tesis de la amenaza terrorista.

parte de una masiva red de inteligencia, de informantes y cooperantes ocupa un lugar central.

- 3) Los principales problemas de crecimiento, empleo, distribución de ingreso y pobreza de la sociedad colombiana se explican esencialmente por la situación de inseguridad y violencia existente en el país. De suerte que, resuelto el problema de la seguridad, la economía entraría en una especie de círculo virtuoso de mayor inversión, empleo y crecimiento, con lo cual se contribuiría además a resolver los problemas fiscales del Estado, por los mayores ingresos públicos que traería el crecimiento. En este supuesto, un escalamiento de la guerra y la mayor destrucción de valor se da casi por descartada, por cuanto se considera que el país “desde hace rato estaba en guerra”. No obstante, si ésa fuera la circunstancia, se trataría de un necesario costo transitorio que, como costo de oportunidad, resulta inferior al costo indefinido de la guerra.

- 4) La idea de “Estado comunitario” representa el proyecto alternativo a la amenaza terrorista. Se trataría de una variante corporativista de la fórmula “democracia liberal más libre mercado”, que supone la “inclusión directa” de sectores medios y pobres de la población en el proyecto político. Tal proyecto político pretende construirse eliminando las mediaciones de los partidos, con base en el apoyo irrestricto e incondicional a la figura del presidente, en torno al cual hay una incesante fabricación de opinión que lo muestra como una persona única, dotada con cualidades excepcionales, casi mesiánicas.

En suma, el proyecto de Uribe Vélez representa la institucionalización de un régimen de excepcionalidad permanente, de una especie de régimen bonapartista, que pretende el control sobre todos los poderes públicos y ciudadanos⁶. Y debe reconocerse que ha avanzado en ese propósito, particularmente con la aprobación de la reforma constitucional que posibilitó la reelección presidencial y permitió su segundo mandato para el período 2004-2008. Además del persistente respaldo de las élites dominantes, de la incesante producción de comunicación a su favor, Uribe Vélez ha sabido apelar a la cultura política de derecha, conservadora, clerical y reaccionaria, que se encuentra arraigada en sectores importantes de la sociedad colombiana.

Por otra parte, no obstante lo que aparentaba ser un sólido y consistente proyecto político de la derecha colombiana, ha empezado a mostrar signos no-

⁶ Véase: Víctor Manuel Moncayo, *El levitán derrotado. Reflexiones sobre teoría del Estado y el caso colombiano*, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2004, y Ricardo Sánchez Ángel, *Bonapartismo presidencial en Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, Uniediciones, 2005.

torios de erosión y descomposición. Dentro del campo de opciones que se ha abierto recientemente no debe descartarse un resquebrajamiento del régimen autoritario, pese al control que tiene el presidente sobre el Congreso, a la captura gradual de las altas cortes, especialmente de la Corte Constitucional, y de los organismos de control, así como del dominio pleno sobre la conducción política de la economía.

Al tiempo que el régimen autoritario ha tenido todas las posibilidades de despliegue, con el apoyo irrestricto del imperialismo norteamericano y de las clases dominantes tradicionales, es un hecho notorio que su sustento descansa también en una alianza *non sancta* con el narcoparamilitarismo. Cada vez son mayores las evidencias que comprometen directamente la figura del presidente. A las reiteradas denuncias de la izquierda y de importantes organizaciones no gubernamentales, se les suman ahora testimonios, videos y otras pruebas documentales de narcotraficantes y paramilitares, que muestran su connivencia con esa organización criminal. El entorno del presidente, un número importante de congresistas y aliados políticos, miembros del gabinete ministerial, políticos profesionales de diverso nivel, integrantes de alta graduación de las fuerzas militares, miembros de la administración de justicia, sectores empresariales nacionales y transnacionales, entre otros, articulados con narcotraficantes y paramilitares hacen parte del *paraestado* que se construyó en Colombia durante las últimas décadas. Hoy resulta incontrovertible que ese *paraestado* no es más que una de las variaciones institucionalizadas, alentadas desde el Estado mismo, de la dominación capitalista. Es otra de las variantes del terrorismo de Estado. Todo ese andamiaje que fue puesto al servicio del proyecto de la "seguridad democrática", se constituye hoy en uno de sus flancos débiles.

El hecho de que luego de un lustro no se haya producido el cambio esperado en el balance militar de la guerra a favor del gobierno es otro factor de erosión. Su promesa de doblegar a las FARC en 18 meses no pudo ser cumplida. Se requirió otro mandato presidencial; después de transcurrido el primer año del nuevo gobierno de Uribe Vélez, no obstante, no hay nada que indique que se esté en el final de la guerra en Colombia⁷.

⁷ Tal hipótesis sólo es sostenida por el Ministerio de Defensa e intelectuales de la derecha, como Eduardo Pizarro. Al respecto véase: Eduardo Pizarro-Leongómez. "Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión?", en Varios autores, *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Grupo Editorial Norma, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 2006.

A lo anterior se suma el creciente papel de las luchas y resistencias sociales —que se ha manifestado en importantísimas movilizaciones de masas y en el desarrollo de nuevos niveles de organización política, social y popular con miras a la consolidación de un proyecto político alternativo del orden nacional—, al igual que los cambios en el balance político y de poder de América Latina, especialmente en los países vecinos, que parecieran sugerir que se abre un nuevo compás para las fuerzas democráticas y revolucionarias.

Hasta este punto se podría afirmar que la experiencia colombiana, si bien no difiere significativamente de lo que ha sido la trayectoria neoliberal en América Latina, sí registra algunas especificidades, las cuales resultan del hecho de que las transformaciones neoliberales se han acompañado de una intensificación de la guerra contrainsurgente, un creciente intervencionismo militar norteamericano y la entronización de rasgos criminales y mafiosos en la formación socioeconómica.

Intervencionismo norteamericano e intensificación de la guerra contrainsurgente

Un aspecto esencial para el entendimiento de la cuestión colombiana consiste en considerar que este país se ha convertido en componente clave de la estrategia imperialista norteamericana para América Latina. Ésa es otra de las piezas del rompecabezas colombiano que explica —en buena medida— porque se ha asistido a una intensificación de la guerra en Colombia durante la última década. El examen de los planes de guerra de este periodo, el *Plan Colombia*, el *Plan Patriota*, el *Plan Victoria* y el anuncio de un segundo *Plan Colombia* para el periodo (2007-2013)⁸ ponen de relieve precisamente que lo que pareciera ser exclusivamente un asunto interno colombiano, representa —en sentido estricto— uno de los componentes esenciales de la estrategia geopolítica y de militarización de Estados Unidos en América Latina, con el cual se pretende garantizar la hegemonía y la dominación imperialista sobre la región andinoamazónica.

⁸ Según el gobierno de Uribe Vélez, con el propósito de “consolidar los logros del Plan Colombia” con un costo estimado de 43,836 millones de dólares. Véase: diario *El Tiempo*, Bogotá, 1 de febrero de 2007, pp. 1-2. Un análisis amplio del Plan Colombia y sus implicaciones se encuentra en Jairo Estrada Álvarez (editor), *Plan Colombia. Ensayos críticos y El Plan Colombia y la intensificación de la guerra. Aspectos globales y locales*, publicados por la Universidad Nacional de Colombia en 2001 y 2002, respectivamente.

De manera específica, se busca producir una salida militar al conflicto social y armado colombiano, mediante la intensificación de la guerra contrain-surgente, así como debilitar las fuerzas políticas, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales y populares, en suma, las fuerzas opositoras, consideradas como extensiones del “terrorismo”. El imperialismo pretende convertir a Colombia, en tanto apoya y estimula su gobierno autoritario de derecha y lo erige en su reserva “democrática” y de “libre mercado”, en la base de contención de la avanzada del movimiento social y popular en América Latina y, especialmente, de los proyectos políticos de los gobiernos progresistas de la región. No hay duda de que el gobierno de Uribe Vélez es el principal aliado de Bush en la región, absolutamente subordinado y plegado a los intereses norteamericanos.

El intervencionismo norteamericano tiene como propósito asegurar el control territorial sobre una región clave para las nuevas estrategias de acumulación de las empresas transnacionales en la actual fase capitalista, dada precisamente la riqueza en recursos energéticos y de biodiversidad, fuentes de agua, y otros recursos naturales de la región andino-amazónica, así como las proyecciones de los negocios capitalistas en biocomercio, biocombustibles y megaproyectos infraestructurales, entre otros. En este sentido, los planes de guerra, especialmente el *Plan Colombia*, se articulan con el *Plan Puebla Panamá*, un plan de megaproyectos infraestructurales para unir corredores logísticos y biológicos de México con Centroamérica⁹, y la *Iniciativa para la integración de la infraestructura sudamericana* (Iirsa), los cuales tienen su origen en el *Plan de Acción de las Américas*, suscrito por los presidentes y jefes de Estado del hemisferio americano, exceptuada Cuba, en 1994¹⁰. Como pieza del rompecabezas del proyecto hegemónico de Estados Unidos para América Latina, el *Plan Colombia* es por el momento su principal brazo militar, que se entronca también con los proyectos de tratados de libre comercio bilaterales, luego del fracaso del *Área de libre comercio de las Américas* (ALCA).

⁹ Al respecto véase: Andrés Barreda Marín, “Los peligros del Plan Puebla Panamá”, publicado en Jairo Estrada Álvarez (compilador), *Dominación, crisis y resistencias en el nuevo orden capitalista*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Departamento de Ciencia Política, 2003.

¹⁰ Véase: Martha Alicia Duque, “La agenda oculta geoestratégica de la integración USA”, en Documentos *Desde abajo*, Bogotá, 2006.

Como es de amplio conocimiento, el *Plan Colombia* fue elaborado secretamente por los gobiernos de Bill Clinton (1993-2001) y de Andrés Pastrana (1998-2002), presentado al Congreso de Estados Unidos en octubre de 1999 y sancionado, de acuerdo con la ley de ese país, el 13 de julio de 2000 por parte del presidente Clinton en la forma de un “paquete de ayuda”. Su denominación oficial fue *Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado*. En el discurso del Departamento de Estado se señaló que se trataba de “una estrategia integral para enfrentar los desafíos de Colombia: la promoción del proceso de paz, la lucha contra el tráfico de drogas, la reactivación de la economía y el fortalecimiento de los pilares democráticos de la sociedad colombiana”, con un costo estimado de 7,558.1 millones de dólares para un período inicial de seis años¹¹.

Las intenciones geopolíticas y económicas del *Plan Colombia* se escondieron desde un inicio tras la fachada de la “guerra contra el narcotráfico”¹². Ésta se convertiría rápidamente –y con mayor fuerza después del 11 de septiembre– en la guerra contra el “narcoterrorismo”, y se erigiría realmente en dispositivo de control social, político y militar. El Plan convirtió a Colombia en el principal país receptor de la “ayuda militar” estadounidense en América Latina (más del 80 por ciento). Entre 1999 y 2006, el país recibió –según el Centro de Política Internacional de Washington– 5,062.8 millones de dólares. Menos del 20 por ciento de esos recursos se destinó para programas económicos y sociales; la mayor parte se destinaría para la financiación de la guerra contrainsurgente y beneficiaría a las empresas transnacionales norteamericanas relacionadas con el negocio de la guerra en Colombia. En algunas zonas de Colombia, el Plan terminó articulándose de manera perversa con la estrategia narcoparamilitar de control territorial, agravó la situación de violencia y desplazamiento forzado de población, el cual ha afectado a más de 3,500,000

¹¹ El costo de la primera fase del Plan Colombia 2000-2006 ascendió a 13,181 millones de dólares. Véase: diario *El Tiempo*, Bogotá, 1 de febrero de 2007, pp. 1-2.

¹² En materia de la llamada guerra contra las drogas, los resultados del Plan Colombia han sido un fracaso: según informes de la CIA y del gobierno de Estados Unidos, en 2006 se produjo un incremento del área cultivada de hoja de coca de 144 mil a 156 mil hectáreas, pese a la aspersión aérea de cerca de 200 mil hectáreas al año con el herbicida glifosato (*El Tiempo*, ibídem); no se ha reducido el precio de la cocaína en Estados Unidos, lo que hace suponer que no se ha afectado sensiblemente la producción del alcaloide. Por otra parte, su incidencia sobre el medio ambiente ha sido desastrosa.

personas durante los últimos 15 años. Las políticas del Plan han incidido negativamente sobre las relaciones de Colombia con Ecuador y Venezuela, algunas de cuyas zonas de frontera se vieron afectadas por las fumigaciones aéreas y el desplazamiento¹³.

Por otra parte, la intensificación de la guerra en Colombia no puede ser leída exclusivamente desde la perspectiva de la estrategia imperialista para la región. Si bien tal perspectiva ha adquirido una mayor relevancia en el momento actual, no debe olvidarse que el conflicto social y armado colombiano posee su propia dinámica interna, que se remite, cuando menos, a más de cuatro décadas de lucha insurgente, posee unas fuertes raíces sociales y se encuentra anclado en las persistentes condiciones de desigualdad y pobreza que afectan a la mayoría de la población colombiana. Las fuerzas insurgentes continúan siendo un factor político para la transformación de la sociedad colombiana. Su papel se tornó de mayor trascendencia dado su crecimiento durante la década de 1990 y la persistencia de su presencia histórica, precisamente en regiones estratégicas para la nueva espacialidad capitalista, pues allí se encuentran nuevas fuentes de valorización y acumulación: recursos energéticos, otros recursos naturales, biodiversidad, fuentes de agua, megaproyectos. Esta misma circunstancia explica el significado de la lucha por el territorio y su control, así como la emergencia del proyecto paramilitar durante las últimas décadas.

*Capitalismo criminal y organización mafiosa de la sociedad*¹⁴

El rompecabezas colombiano se continúa armando cuando se consideran los rasgos criminales y mafiosos de la formación socioeconómica. Se trata, entre tanto, de componentes orgánicos, estructurales, de la actual fase capita-

¹³ El gobierno de Ecuador dio inicio en abril de 2007 al *Plan Ecuador*, concebido como un plan de paz e inversión social, para oponérselo al guerrillero *Plan Colombia*. El *Plan Colombia* ha generado, por otra parte, un movimiento internacional de rechazo y de denuncia, que involucró a sectores importantes de la comunidad internacional, de los movimientos sociales y populares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de científicos e intelectuales críticos. Dicho movimiento se inscribe dentro de las diferentes expresiones de organización y lucha en la actual fase del proceso de globalización capitalista.

¹⁴ Una exposición más amplia de este punto se encuentra en Jairo Estrada Álvarez, "Capitalismo criminal y organización mafiosa de la sociedad", *Revista Cepa*, núm. 3, Bogotá, 2007.

lista; en momento alguno, de fenómenos episódicos¹⁵. Dada su maduración, con el gobierno de Uribe Vélez se pretende justamente su institucionalización. Se trata de un producto histórico, expresivo de varias décadas de transformaciones capitalistas, tanto en la tendencia de la acumulación de capital como en las configuraciones del régimen político.

En el caso colombiano, la articulación de las formas legales con las formas ilegales de la acumulación capitalista se remonta a la segunda mitad de la década del setenta y se inscribe dentro de la transición del régimen de acumulación basado en la industrialización dirigida por el Estado hacia el régimen actual de *financiarización* del capital. Sin temor a la exageración, se podría aseverar que esa transición no hubiera sido exitosa sin el surgimiento de un nuevo empresariado vinculado a los circuitos transnacionales de la acumulación: el empresariado de la cocaína¹⁶. La potencia desplegada para la acumulación de capital por el entronque de las formas legales con las formas ilegales no es medible actualmente —y probablemente nunca lo será—. Si bien hay cuantificaciones sobre el tráfico de cocaína, no las hay —con la objetividad requerida— sobre el impacto de sus capitales en el conjunto de la economía. La tecnocracia neoliberal y los voceros oficiales siempre se han empeñado en minimizarla. Pero lo cierto es que la pregonada estabilidad macroeconómica colombiana y

¹⁵ Dos trabajos contribuyen a enriquecer esta perspectiva y han servido como referente de algunos de los planteamientos de este punto. Uno, que puede considerarse pionero en el estudio de la experiencia colombiana y de suma actualidad, es el artículo de Germán Palacio y Fernando Rojas publicado en 1989: “Empresarios de la cocaína, parainstitucionalidad y flexibilidad del régimen político colombiano: Narcotráfico y contrainsurgencia en Colombia”, publicado en el libro compilado por Germán Palacio, *La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana*, Bogotá, ILSA, Cerec, 1989. El otro, el texto de Francesco Forgione, “Organizaciones criminales y capitalismo globalizador. Reflexiones a partir de la experiencia italiana”, publicado en el libro de memorias del II Seminario internacional Marx vive, Jairo Estrada Álvarez (compilador), *Sujetos políticos y alternativas en el actual capitalismo*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2003.

¹⁶ Aquí compartimos la distinción de Palacio y Rojas entre el negocio asociado al tráfico de cocaína y el narcotráfico propiamente dicho. “Mientras el tráfico de cocaína es un mecanismo de acumulación capitalista, ilegal e internacionalizado, el narcotráfico es una especie de dispositivo político utilizado por los gobiernos y, particularmente, el gobierno de Estados Unidos (aunque no solamente por éste) para realizar operaciones de represión, disciplinamiento y control social”. Germán Palacio y Fernando Rojas, op. cit., p. 81.

la relativa excepcionalidad frente a las profundas crisis económicas latinoamericanas han descansado sobre el colchón de los capitales ilegales. Lo mismo podría afirmarse de la persistente prosperidad de buena parte de los grandes negocios capitalistas privados en el sector financiero y el mercado de capitales, la industria, la construcción, la hotelería, el turismo, el comercio (incluido el de importación y exportación), los servicios, el entretenimiento, la salud y la educación, tanto como algunas actividades agrícolas y ganaderas, y, también, ciertos “milagros económicos” regionales (transitorios).

La articulación entre las formas legales y las formas ilegales de la acumulación capitalista contribuyó hacia finales de la década de 1980 a la formación de un nuevo consenso a favor de las “reformas estructurales” y de la reestructuración neoliberal del Estado, y produjo una reconfiguración en el bloque dominante de poder, la cual se anunciaba ya desde la década de los setenta con el surgimiento de nuevos “grupos económicos” y la influencia creciente del capital financiero. Sólo que ahora se agregaba una alianza *non sancta*—construida a lo largo de la década de los ochenta— entre sectores capitalistas legales y los empresarios de la cocaína. Se fortalecían así los rasgos criminales de la economía. Las estructuras mafiosas habían permeado igualmente las instituciones del Estado (todos los poderes públicos), incluidas las Fuerzas Armadas, los partidos políticos tradicionales y los políticos profesionales, y sectores de la Iglesia. Se consolidaba así la estructura mafiosa de la formación socioeconómica¹⁷.

No es casual que ya en la segunda mitad de la década de 1980 se anunciara la irrupción del *paraestado*¹⁸. Al respecto señalaban Palacio y Rojas en 1989: “[...] el paraestado no sólo tenía una fracción del capital que empezaba a ser

¹⁷ Se habla de estructura mafiosa cuando se persigue el doble objetivo de “asumir el control total de un territorio y sustituir la autoridad legal del Estado con la propia autoridad y la propia mediación social. Esto ocurre con la penetración en la política y en las instituciones y, sobre todo, con el ejercicio [...] de la violencia [...] La mafia —señala Forgione— es siempre una empresa capitalista, con un fuerte factor adicional: la fuerza intimidatoria de la violencia. Pero su esencia es y será la de ser una empresa criminal encaminada a la acumulación de capital”. Francesco Forgione, op. cit., pp. 98 y 102.

¹⁸ La noción de *paraestado* no se refiere exclusivamente al Estado paramilitar; ésta es una simplificación inconveniente que sólo pone de relieve la dimensión militar de la estrategia de poder de la fracción capitalista vinculada a los negocios de (y en torno) a la cocaína. En sentido estricto, se trata de una nueva constitución política del poder y la dominación, que descansa precisamente sobre las nuevas tendencias de la acumulación capitalista y las reconfiguraciones del régimen político.

predominante, sino que los empresarios de la cocaína, aliados con otras fracciones del capital, empezaron a tener control territorial y bases sociales populares en algunas regiones del país¹⁹. Y agregaban: “[...] estamos frente a una especie de “paraestado”. Incluye una poderosa fracción capitalista; un aparato represivo militar; gastos en bienestar social; control territorial regional y un restringido pero eficaz apoyo popular”²⁰.

Empresarios de la cocaína, estructuras mafiosas y paramilitarismo se constituyeron en las formas criminales, en piezas del nuevo rompecabezas de la acumulación de capital en Colombia, basada ahora en la creciente articulación entre sus formas legales y sus formas ilegales. En ese sentido, una explicación esencial del paramilitarismo consiste en entenderlo como el “otro brazo armado”, además de las Fuerzas Militares del Estado, en esa nueva fase de acumulación capitalista. Esta idea es contraria a la de sectores de la intelectualidad del establecimiento que pretenden explicar este fenómeno simplemente como una reacción contra la violencia guerrillera.

La función de acumulación no se ha limitado a la expansión del negocio de la cocaína o a su entronque con negocios legales existentes. A mi juicio, el *paraestado* ha desempeñado dos funciones adicionales del mayor significado: a) ha propiciado una profunda transformación de las relaciones de propiedad, y b) ha incidido sobre la redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo.

En el primer caso no se trata sólo de las transformaciones intercapitalistas; se trata igualmente de los nuevos ciclos de acumulación originaria que ha desatado regionalmente, a saber: el de la expropiación violenta de tierras y el del acceso a los dineros públicos. El *paraestado* se ha mostrado igualmente como parte de una estrategia transnacional de resignificación de la tierra como fuente de valorización capitalista (biodiversidad, recursos hídricos), de promoción de megaproyectos infraestructurales y energéticos, y de un nuevo tipo de agricultura de plantación. En el segundo caso se trata de la flexibilización y desregulación violenta del mundo del trabajo, del exterminio de dirigentes políticos y sindicales, del desplazamiento forzado de más de tres millones de colombianos, que engrosan las filas de la informalidad y contribuyen a la depresión de los salarios urbanos.

¹⁹ Estos autores explican el surgimiento y desarrollo del *paraestado* “en el contexto de las dificultades del Estado y las fuerzas militares para combatir a los grupos guerrilleros y las luchas con potencialidades autónomas populares”. Op. cit., p. 96.

²⁰ *Ibidem*, p. 97.

La función de acumulación no debe reducirse a una dimensión exclusivamente económica. El *paraestado* es expresivo igualmente de las configuraciones del régimen político; de su carácter “flexible”. En la combinación de los mecanismos *democráticos formales* con los *represivos autoritarios*, se encuentra la explicación de la relativa estabilidad del régimen político colombiano²¹. En ese aspecto, la irrupción del *paraestado* se comprendería en términos de solución de los problemas de estabilidad del régimen que no pueden ser resueltos por la vía democrático-formal. La apelación a un brazo armado paramilitar para exterminar fuerzas políticas opositoras o liquidar las más diversas formas de organización social y popular, se constituye en componente clave de una estrategia de control social y político para afianzar la dominación y la tendencia de la acumulación capitalista.

La transformación sustancial que ha ocurrido en la sociedad colombiana en las últimas décadas ha sido la entronización de los rasgos criminales de la formación socioeconómica, el despliegue de sus estructuras mafiosas y la extensión del aparato paramilitar, lo cual ha ocurrido al tiempo que se ha vivido otra prosperidad: la de los “grupos económicos” y los grandes capitales, articulados ahora a los negocios de la mundialización del capital. Las “zonas grises” de intersección entre “acumulación legal” y “acumulación ilegal” no están claras, ni demostradas empíricamente con suficiencia. La estrategia de control territorial, como estrategia de poder, se amplió al ámbito nacional y a la pretensión de control de la estructura del Estado en su conjunto. Lo que parecía tornarse en un campo de poder en disputa entre fracciones capitalistas, parece erigirse en nuevo escenario de transacción. Los “capitales limpios”, ahora como antes, parecen acceder a nuevos acuerdos, a nuevas alianzas.

De lo que se trata actualmente es de cerrar el círculo. El *paraestado* que se gestó y nació en la década de 1980, que se extendió y profundizó a lo largo de los noventa y principios de este siglo, en esa alianza entre empresarios de la cocaína y sectores capitalistas legales, debe ser reincorporado a la institucionalidad. Ya no es funcional. Desentona incluso con los actuales lenguajes de la democracia liberal. Por eso, la época es de desmovilizaciones y de reinserciones, de institucionalización de derechos de propiedad adquiridos ilegalmente, sin memoria, ni justicia, ni reparación, o con sus caricaturas²². Por ello, empresarios

²¹ Según las circunstancias históricas, se han privilegiado desplazamientos en uno o en otro sentido, manteniendo siempre la fachada democrática.

²² La ley de tierras, aprobada por el Congreso colombiano en la legislatura del primer semestre de 2007 es una indicación de ello.

de la cocaína, mafiosos y paramilitares dentro y fuera del Estado, en negocios “limpios” o no, aparecen ahora como deliberantes políticos. Ésa es la verdadera empresa del gobierno de Uribe Vélez: una inmensa operación de limpieza. Para ello cuenta con el irrestricto apoyo del gobierno de Estados Unidos y de las transnacionales estadounidenses²³, que se han beneficiado durante décadas de esas configuraciones particulares de la acumulación capitalista y del régimen político, y que han sabido hacer de la lucha contra el “narcoterrorismo” su mejor bandera de política exterior, para proyectar una estrategia de guerra contrainsurgente y convertir a nuestro país en una base de contención de las avanzadas del movimiento social y popular en América Latina.

La complejidad del proceso político y económico en Colombia se amplía, cuando se consideran las persistentes formas y expresiones de organización, las diversas modalidades de resistencia y lucha social y popular²⁴, así como los proyectos políticos emprendidos por las organizaciones de izquierda, dentro y fuera de la organización institucional del Estado. Todo ello, pese al exterminio sistemático a que se ha visto sometido el movimiento social y popular, así como sus organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Al tiempo que, por una parte, la tendencia histórica de la acumulación capitalista y de las configuraciones del régimen político han producido un proyecto político y económico neoliberal, autoritario, que se organiza de manera “flexible” conjugando las reglas de la “democracia liberal” con estructuras criminales y mafiosas, en un contexto de guerra contrainsurgente, se aprecia, por la otra, una incesante lucha por la democratización de la sociedad en diversos niveles y a través de diversas formas, con desiguales y heterogéneos resultados. De ello dan cuenta, por ejemplo, las diferentes experiencias de proyectos políticos alternativos y, en particular, de los *gobiernos alternativos locales*, así como las proyecciones actuales de la izquierda colombiana en el orden nacional (y local).

No es propósito de este trabajo realizar un balance exhaustivo de las diferentes experiencias de *gobiernos alternativos locales*, simplemente se ha hecho un acercamiento exploratorio a tales experiencias con el propósito de auscultar aspectos de interés para un balance político de proyectos de izquierda.

²³ Recientemente se ha podido demostrar que transnacionales estadounidenses como *Chiquita Brands* y la *Drummond* han estado comprometidas con el apoyo y la financiación de grupos paramilitares.

²⁴ Véase: Mauricio Archila Neira, *Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-2000*, Bogotá, Icanh, Cinep, 2005, y varios autores, *25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000*, Bogotá, Cinep, 2002.

ALGUNAS EXPERIENCIAS DE GOBIERNOS ALTERNATIVOS LOCALES

Un acercamiento al estudio de las tentativas de gobiernos alternativos en Colombia obliga a considerar diversas experiencias y trayectorias históricas, muy heterogéneas. En desarrollo de ese propósito, se abordan aquí diversas expresiones de tales gobiernos durante las últimas dos décadas, a saber:

- los proyectos de “poder popular” de la insurgencia armada;
- los gobiernos locales de la Unión Patriótica;
- el gobierno local del Bloque Social Alternativo en el departamento del Cauca;
- el gobierno de Luis Eduardo Garzón en Bogotá.

Los proyectos de “poder popular” de la insurgencia armada

Una de las especificidades colombianas para el estudio de proyectos políticos alternativos consiste en la consideración de la experiencia del movimiento guerrillero. Aunque el tema ha sido poco estudiado, en un reciente trabajo se ha abordado el papel de la insurgencia en la construcción de poderes populares, desde una perspectiva de análisis que se apoya en la literatura marxista sobre el *poder dual*²⁵. De los procesos acumulativos históricos que Aguilera registra, resulta de especial interés la estrategia del movimiento insurgente de influir sobre los poderes locales desde finales de la década de 1980²⁶, en el marco de los cambios institucionales que trajo consigo el proceso de descentralización. En desarrollo de ese propósito, las FARC y el ELN habrían usado los siguientes mecanismos:

“Participación de manera indirecta o directa en la elección de los gobiernos municipales. En esa misma lógica guerrillera se entiende la imple-

²⁵ Véase al respecto el trabajo de Mario Aguilera Peña, “Insurgencia y construcciones de poder popular. Una perspectiva desde la historia de Colombia”, presentado en el V Seminario internacional Marx vive. Alternativas y gobiernos alternativos en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2006.

²⁶ El autor también examina la experiencia de la “colonización armada”, en la que los grupos guerrilleros sustituyen al Estado en sus funciones y respaldo a esas comunidades campesinas; así como la adopción —a su juicio— del modelo maoísta de guerra popular prolongada, en la que la construcción de poder popular es dotada con un norte político militar, y ajustada a las variables de la guerra. Siguiendo la experiencia salvadoreña, se trataría de seguir la estrategia del “poder de doble cara”. *Ibidem*.

mentación de la veeduría armada que impuso sobre los presupuestos municipales, con el juzgamiento de alcaldes y concejales.

El establecimiento de formas de tributación sobre la producción o la extensión de la tierra, sobre el conjunto de la riqueza y las operaciones comerciales.

La implementación de formas de justicia guerrillera para resolver conflictos colectivos o entre miembros de las comunidades campesinas.

El desarrollo de organizaciones populares influidas por las guerrillas en varias regiones en las que no necesariamente éstas contaban con algún control territorial²⁷.

Estos proyectos tenían una fuerte incidencia en la constitución específica de las relaciones sociales locales: propiciaban formas de organización y de participación social y popular, incidían sobre la orientación de la política pública y sobre el uso de los recursos, convirtiéndose en poderes alternativos. Su estabilidad, consistencia y duración, no obstante, han dependido en gran medida de la dinámica de la guerra. La intensificación de la guerra y la expansión paramilitar a lo largo de la década de los noventa afectarían sensiblemente los proyectos insurgentes de poder popular, si se tiene en cuenta el inevitable cambio en la táctica guerrillera, dado su repliegue.

Los gobiernos locales de la Unión Patriótica

El caso de los gobiernos locales de la Unión Patriótica es probablemente uno de los primeros en los que fuerzas políticas de izquierda acceden a posiciones de gobierno local en América Latina, en zonas rurales y de fuerte presencia campesina. La Unión Patriótica fue una organización política surgida de los acuerdos de La Uribe, suscritos en 1983, entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que fue conformada por guerrilleros destacados para la actividad política legal, militantes del Partido Comunista Colombiano y sectores democráticos (en el nivel local) de los partidos tradicionales, liberal y conservador, con el propósito de disputar en el terreno electoral la hegemonía de los partidos de la burguesía.

Después de la experiencia de la populista Alianza Nacional Popular²⁸, se trató del intento más consistente por enfrentar con relativo éxito el bipartidismo liberal-conservador. Su avance electoral fue notorio durante la segunda mitad

²⁷ *Ibidem.*

²⁸ Al respecto véase: César Ayala Diago, *El populismo atrapado, la memoria y el miedo. El caso de las elecciones de 1970*, Medellín, Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, La Carreta Editores, 2006.

de la década de 1980 y logró convertirse en una fuerza de alcance nacional a finales de la misma. Con la aprobación de la elección popular de alcaldes (como parte de la política de descentralización emprendida por el Estado desde mediados de la década de los ochenta), esa fuerza política incursionó con candidatos propios en la contienda electoral de 1988 y obtuvo 18 alcaldías; en 1990 alcanzó 13 y en 1994, 24 (sin contabilizar, las alcaldías de “convergencia”, que llegaron a 100)²⁹. En la mayoría de los casos se trató de gobiernos municipales en zonas en las que era notoria la presencia de la guerrilla de las FARC.

No existen –hasta el momento– estudios que se hayan ocupado del examen sistemático de esa experiencia, considerando su significado para la construcción de proyectos de gobiernos alternativos³⁰. Más allá de su origen claramente popular y de la voluntad por reencauzar la política de inversión local, estos gobiernos mostrarían las dificultades propias de una fuerza política que hace la experiencia inédita de gobierno “sobre la marcha”, sin cuadros con conocimiento de la cosa pública, pero que desarrolla un concepto de democracia participativa (directa, en algunos casos) particularmente en las definiciones presupuestales y de inversión social local, anticipándose a lo que posteriormente serían las experiencias más elaboradas de los “presupuestos participativos” en otros países de América Latina, particularmente en Brasil, durante la década de 1990³¹. Estos gobiernos de la Unión Patriótica mostraron un cierto grado de articulación con las estrategias insurgentes de poder popular en el orden local. Se trató, en todo caso, de una experiencia de muy corta duración, dado el exterminio sistemático al que se vio sometida esa fuerza política desde su creación³².

²⁹ Luis Alberto Mata Aldana, *Poder capitalista y violencia política en Colombia. Terrorismo de Estado y genocidio contra la Unión Patriótica*, Bogotá, 2002, pp. 6 y 7.

³⁰ Las investigaciones sobre la Unión Patriótica se han ocupado principalmente de su exterminio sistemático en el marco de una política que ha sido caracterizada como de genocidio y de terrorismo de Estado. Véase: Iván Ortiz Palacios, *Genocidio político contra la Unión Patriótica. Nuevas miradas para nuevas lecturas*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2006.

³¹ Estas falencias fueron compensadas parcialmente con la asesoría de intelectuales y expertos del entorno del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS), institución del Partido Comunista Colombiano que contribuyó en algunos casos al diseño de los planes de desarrollo y del manejo de las finanzas municipales.

³² Se estima que más de 3 mil militantes fueron asesinados; entre ellos, parlamentarios, alcaldes y ex alcaldes. Iván David Ortiz Palacios, *Genocidio político contra la Unión Patriótica. Nuevas miradas para nuevas lecturas*, op. cit.

El gobierno local del Bloque Social Alternativo

El gobierno del departamento del Cauca (2001-2003) por parte del Bloque Social Alternativo (BSA) representa una experiencia de gobierno alternativo local surgida desde el movimiento social³³. El BSA se creó como organización a principios del año 2000, con el propósito de construir una propuesta política regional desde una perspectiva de izquierda, que lograra enfrentar la hegemonía de la oligarquía caucana, latifundista y racista³⁴.

El BSA recogió los acumulados de organización y movilización social y popular, cuyo pasado más reciente se remontaba a la segunda mitad de la década de 1980 y su momento de mayor ascenso se había expresado con el paro del Macizo Colombiano de noviembre de 1999; también estaban presentes en la historia y en la memoria siglos de resistencia indígena en diversas formas. El BSA se constituyó en una organización de carácter transversal que logró articular diversas trayectorias de organización social y popular, así como de izquierda partidista; en él confluyeron el Movimiento de Integración del Macizo Colombiano³⁵, el Comité Regional Indígena del Cauca, las Autoridades Indígenas de Colombia³⁶, la seccional de la Central Unitaria de Trabajadores³⁷ y sectores del magisterio (de orientación maoísta)³⁸, así como movimientos campesinos y comunales. Todas estas agrupaciones en torno al BSA se

³³ Un análisis detallado de esta experiencia fue elaborado por Diego Jaramillo Salgado, en su trabajo "Movimientos sociales y resistencia comunitaria en El Cauca", en *Pensar y Hacer* (nueva época), Revista electrónica de pensamiento y cultura latinoamericana, http://www.ccydel.unam.mx/PensamientoyCultura/PensaresyHaceres/Movimientos_jaramillo.html.

³⁴ Un completo análisis de la problemática del departamento del Cauca, considerando especialmente el conflicto y la resistencia social, se encuentra en Edgar Novoa, "Cauca: neomodernización violenta y resistencia social", en *Separata, Revista Espacio Crítico*, núm. 7, Bogotá, julio-diciembre 2007, www.espaciocritico.com.

³⁵ *Mimacizo* recogía, por su parte, diversas expresiones coordinadas de organización popular, de campesinos, negros e indígenas, de regiones con presencia insurgente, especialmente del Ejército de Liberación Nacional, y de ex militantes de A Luchar, organización política de izquierda de la década de 1980.

³⁶ El CRIC y AICO representaban las formas de organización del movimiento indígena. El Cauca se caracteriza por ser un departamento con una fuerte presencia indígena, entre otros, de guambianos, paeces, nasas y anaconas.

³⁷ Se trataba principalmente de trabajadores del Estado y del sector bancario.

³⁸ Entrevista a Luis López, dirigente sindical del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), realizada el jueves 1 de febrero de 2007.

presentaron a la contienda electoral departamental de 2000 con un programa alternativo y un candidato único, el indígena guambiano *taita* Floro Tunubalá. El candidato popular derrotó –incluso en Popayán, la capital del departamento– al candidato de la oligarquía bipartidista local. El 1 de enero de 2001 se inició el primer gobierno alternativo del departamento del Cauca, que se prolongaría hasta el fin del año 2003.

El gobierno de Tunubalá contó desde el inicio con una serie de limitaciones, algunas de contexto, otras provenientes de su propio entorno³⁹. De entrada, se pusieron en evidencia los obstáculos a gobiernos locales alternativos que se adelantan bajo las condiciones de la reestructuración neoliberal, en particular, aquellos relacionados con los diseños del proceso de descentralización. Al finalizar 1999 se había suscrito un acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional y –en desarrollo de éste– se emprendieron, entre otras, una serie de medidas de “ajuste fiscal territorial”, que tenían como propósito el “saneamiento” de las finanzas locales. Las políticas neoliberales de los noventa se habían acompañado de un acelerado endeudamiento territorial, de nuevas formas del clientelismo, así como de nuevas modalidades corruptas de apropiación de los dineros públicos, cuyo producto, al final de la década, sería una situación fiscal territorial insostenible. El terreno para una política de ajuste estaba abonado. Algunos departamentos, entre ellos el departamento del Cauca, se encontraban “quebrados” y debieron someterse al saneamiento impuesto, primero, por la ley 550 de 1999 (denominada de intervención económica) y, luego, por la ley 617 de 2000 (denominada del ajuste territorial). Someterse a estas disposiciones legales significaba quedar en manos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación⁴⁰, como en efecto habría de ocurrir. A ello se adicionaría, en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la aprobación de una reforma constitucional que afectó sensiblemente las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales para la financiación de la educación, la salud y otras modalidades del gasto social (me refiero al Acto legislativo 01 de 2001).

Nos encontramos, entonces, frente a un gobierno alternativo, cuyo programa pretendía atender demandas populares de diversa índole, pero no con-

³⁹ El departamento del Cauca se caracteriza, entre otros, por un ancestral conflicto de tierras, producto de la expropiación de que fueron objeto las comunidades indígenas asentadas en ese territorio. Asimismo, el conflicto social y armado ha tenido una particular intensidad.

⁴⁰ El “ajuste” que el FMI le imponía al país, se reproducía como el “ajuste” que estas instituciones le imponían a los gobiernos locales.

taba con los recursos correspondientes de presupuesto⁴¹. Las posibilidades de desarrollar una política pública con un mayor énfasis en lo social que, por cierto, no necesariamente es un distintivo de la izquierda, se vieron limitadas al extremo. Al gobierno de Tunubalá se le reconoce el manejo pulcro de los recursos públicos y haber impedido la privatización de la industria licorera del departamento.

Por otra parte, la gestión de Tunubalá encontró muchas dificultades en la administración pública. Los aparatos burocráticos del Estado, en todos sus niveles, están concebidos como instrumento de reproducción del sistema político bipartidista (liberal-conservador). El “servicio público” se encuentra capturado por grupos políticos tradicionales, que aun perdiendo (transitoriamente) las posiciones de gobierno, pueden continuar ejerciendo una gran influencia sobre el curso de la política pública, como habría de ocurrir en el departamento del Cauca. Tunubalá señala que con la excepción de sus secretarios, estuvo “mal rodeado” durante su gobierno⁴².

Desde la perspectiva de un balance político de izquierda, el de Tunubalá no fue un gobierno que contribuyese a consolidar la organización social y popular del Bloque Social Alternativo, más allá de los acumulados imperceptibles consustanciales a los procesos sociales.

Desde la conformación del equipo de gobierno se apreciaron las primeras dificultades; además de aquellas propias de la falta de cuadros, se observó un distanciamiento entre el equipo y el movimiento; éste no se vio suficientemente representado en el gobierno; aquel se autonomizaría del movimiento⁴³. Como en otras experiencias de América Latina, también en este caso, se habría de “conformar” el “partido transversal”, esto es, la instancia de toma

⁴¹ El ajuste castigaba los gastos de funcionamiento e inversión para cubrir las deudas; el gobierno central se comprometía a concurrir sólo si se aceptaba su política de ajuste. Tunubalá señala que esa situación lo obligó a buscar recursos en el exterior (en Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea) con relativo éxito y en bajas proporciones. Entrevista realizada a Floro Tunubalá el 3 de febrero de 2007.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ En la conformación del equipo, parece ser que la idea de lograr una mayor gobernabilidad, con la incorporación de otros sectores distintos del BSA, condujo a que algunas Secretarías de importancia fueran regentadas por representantes de la élite caucana. Así por ejemplo, la Secretaría de Hacienda fue una “cuota” de la Cámara de Comercio del departamento.

de decisiones por parte de un núcleo reducido de dirigentes o funcionarios, que sólo atiende sus propias directrices⁴⁴. La no consolidación del BSA tuvo su mejor expresión en el hecho de que su proyecto no pudo tener continuidad en el gobierno. En la elecciones de 2003, la conducción del departamento regresaría a manos de los partidos tradicionales, del liberal, encabezado por Juan José Chaux, quien acompañaba el discurso de la “seguridad democrática”, que para entonces ya había instalado en el país el presidente Uribe Vélez.

El gobierno de Luis Eduardo Garzón en Bogotá

De gran significado para la consideración de experiencias de *gobiernos alternativos locales* en el caso colombiano es la alcaldía de Luis Eduardo Garzón (2004-2007) en la ciudad de Bogotá⁴⁵. Se trata del primer gobierno en una gran ciudad, la capital del país, que es asociado por la opinión pública con un proyecto político de izquierda. Su significado parece aún mayor, si se considera que esa alcaldía se logra en pleno ascenso del proyecto autoritario de Uribe Vélez, derrotando en la contienda electoral de 2003 precisamente a Juan Lozano, el candidato del presidente, de los grupos económicos con incidencia en la ciudad y del bipartidismo liberal conservador tradicional, organizados ahora en torno al proyecto de la “seguridad democrática”.

Garzón logró canalizar una subjetividad presente en importantes sectores de la ciudad, que demandaban un cambio en la orientación de su desarrollo. En efecto, luego de un trecho importante de “saneamiento” de las finanzas de la ciudad –que se apoyó en mayores cargas tributarias a sectores medios y pobres, y en el emprendimiento de procesos de privatización de los servicios públicos, particularmente de la energía eléctrica– siguió, primero, el despliegue de una estrategia autoritaria de “cultura ciudadana” y, después, un gigantesco programa de obras públicas tendiente a mejorar la infraestructura de la

⁴⁴ Debe reconocerse en todo la instancia de rendición de cuentas creada por Tunubalá, llamada la “minga de gobernabilidad”, que apela a tradiciones indígenas democráticas y participativas, a la que el gobierno presentaba trimestralmente informes de gestión.

⁴⁵ La población actual de Bogotá se estima en más de 7,500,000 habitantes. Es decir, algo más del 17 por ciento del total de la población colombiana que, de acuerdo con las proyecciones del censo de 2005, asciende actualmente a 42,660,000 habitantes. http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php.

movilidad urbana⁴⁶. Tal programa se acompañó de un discurso de política social de ortodoxia neoliberal, que apreciaba en las privatizaciones y el libre juego de las fuerzas del mercado la posibilidad del mejoramiento de las condiciones de vida de la población pobre. En especial, en el sector educativo se estimularía la “educación contratada” y la entrega de colegios públicos en concesiones a operadores privados. Frente a ello, la propuesta programática de Garzón descansó precisamente en una reorientación hacia lo social.

En la elección de Garzón incidió sin duda su trayectoria política. Pese a que para entonces ya había moderado el discurso político, desdiciendo en cierta forma de su pasado militante primero en el maoísmo y luego en el Partido Comunista, y se había desplazado ideológicamente hacia el mal llamado centroizquierda, el candidato Garzón mantenía en el imaginario popular los referentes del dirigente obrero (había sido presidente de la Central Unitaria de Trabajadores - CUT), del hombre luchador por causas justas, del hombre de oposición (había sido el candidato presidencial de sectores democráticos y de izquierda en la elección de 2002). Sin duda fue el candidato de “los de abajo”, pero también de sectores medios e intelectuales.

Garzón llegó a la alcaldía como candidato del Polo Democrático Independiente (PDI)⁴⁷, con el apoyo del Partido Liberal y de la minoritaria izquierda revolucionaria, reunida en el Frente Social y Político⁴⁸. Su figura superaría en

⁴⁶ Se trata específicamente del proyecto de transporte masivo sustentado en buses articulados (llamado Transmilenio), que se consideró alternativo al metro. Tal proyecto se adelantó mediante un concepto de contratación por concesión a consorcios privados, que concede a éstos un doble monopolio: el del uso de las principales vías públicas y el del transporte urbano (en el mediano plazo), en condiciones lesivas para los intereses de la ciudad. El proyecto se extiende hasta el año 2015. Dada la precariedad del transporte urbano en Bogotá, logró ser presentado como “la gran transformación” de la ciudad, con un nivel importante de legitimidad.

⁴⁷ Organización que aglutinaba diversas trayectorias de sectores democráticos que se movían en un escenario puramente electoral (provenientes de la Alianza Democrática M-19, esto es, de desmovilizados del movimiento guerrillero M-19), de la Corriente de Renovación Socialista (de sectores desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional), del Partido Socialdemócrata Colombiano, de sectores provenientes de la Alianza Nacional Popular, entre otros, así como de algunas organizaciones políticas locales. Dentro de los códigos de la derecha, se trataba de la buena izquierda, de la “izquierda democrática”.

⁴⁸ Se trata de la organización que agrupaba al Partido Comunista, sectores provenientes del maoísmo, de Presentes por el Socialismo, así como de organizaciones sociales y populares del nivel local.

votos a las fuerzas políticas que lo acompañaron. Ése sería un factor que incidiría desde el inicio sobre la relación entre el candidato electo y el movimiento. Su gobierno, como era obvio, despertó muchas expectativas. Pese a no ser un gobierno nacional, como en la experiencia de otros países latinoamericanos, el gobierno de Garzón sería visto, en todo caso, como parte del “giro a la izquierda” de América Latina. Garzón era considerado con razón el “Lula colombiano” (en todo sentido, habría que precisar⁴⁹).

La conformación del gabinete distrital marcó la pauta de lo que sería el gobierno de Garzón; evidenciaría su pragmatismo. Antes que producir la ruptura esperada, el alcalde habría de preocuparse por la “governabilidad” de la ciudad; la presencia de sectores liberales y conservadores, así como su desconfianza frente a cuadros políticos y técnicos de izquierda (salvo contadas excepciones), serían notorias. Garzón armaría su propio “partido transversal”. Su distanciamiento de la dirección del PDI y de las bases sociales y populares que lo acompañaron sería evidente. Y ésa sería una constante de su gobierno. De hecho, su gobierno no se ha mostrado como un gobierno del Polo.

El interesante ejercicio democrático de construcción programática del candidato Garzón, que vinculó a sectores sociales y populares, no habría de repetirse en la formulación del plan de desarrollo de la ciudad, que es donde, según la Ley, queda vertido el proyecto político y económico del gobierno. Con cierta timidez en su denominación, *Bogotá sin indiferencia*, se concebiría en todo caso como un plan en el que el énfasis en la inversión social ha sido indiscutible. Se iniciarían además los programas *Bogotá sin hambre*, orientado hacia los sectores más pobres de la ciudad (que se ofreció como una réplica local del programa de Lula), así como otros en educación y salud. Durante el gobierno de Garzón se aprobó una reforma administrativa de la ciudad que, sin cambios sustanciales, reprodujo proyectos que no habían podido ser aprobados por los gobiernos anteriores de la ciudad⁵⁰; así mismo, se aprobaron los planes maestros, que definieron lineamientos sectoriales estratégicos del desa-

⁴⁹ Lula en su doble connotación: como el hombre que viene “de abajo” y representa de manera abstracta a los obreros, a los oprimidos en general; también como el político pragmático de lo “posible” que, en sus pretensiones de ascenso y de construcción de apoyos, está dispuesto a todo tipo de transacciones y, en ese propósito, olvida su origen o desdice de él, para colocarse como otra opción dentro del establecimiento.

⁵⁰ A diferencia de esos proyectos, se le debe abonar que tal reforma —hasta el momento— no ha tenido consecuencias sobre el nivel del empleo público de la ciudad, en el sentido de no haber generado, por ejemplo, una “racionalización” (despidos) de personal.

rrollo de la ciudad. La política económica se caracterizó por el discurso de disciplina fiscal y las finanzas responsables.

Garzón gobernó la ciudad pensando en el encuadramiento de una eventual candidatura presidencial en el año 2010; lo hizo orientado –más que por el movimiento social y popular– por los indicadores de las encuestas de opinión y el programa *Bogotá Cómo Vamos* –financiado por el grupo económico de *El Tiempo* y otros sectores capitalistas del Distrito Capital, así como por la Cámara de Comercio de la ciudad–. Pese a reconocerse como miembro del Polo Democrático Alternativo (PDA)⁵¹, el proyecto político de su “partido transversal” pareciera situarse más bien como un “puente” entre esta organización y sectores de los partidos tradicionales, especialmente del liberalismo. Más hacia el centro, menos hacia la izquierda, se podría afirmar.

Desde la perspectiva de la gestión pública, el gobierno fue en general exitoso. Se le reconoce hasta el momento –salvo casos aislados– un manejo pulcro, no corrupto de la cosa pública. Sus resultados económicos le son favorables; desde el punto de vista social, logró disminuir los niveles de pobreza en la ciudad; amplió las coberturas de los programas de alimentación; se destacó de manera particular en el campo de la educación; se mostró capaz de asumir problemas “transversales” (aunque con menores reconocimientos en el campo ambiental y de movilidad urbana). Las relaciones con los sindicatos públicos fueron en general buenas: el gobierno de Garzón atendió desigualmente sus demandas y logró neutralizarlos. Su énfasis social, expresado –entre otros– en las asignaciones presupuestales, es incontrovertible, y eso es importante.

Si el gobierno de Garzón se examina, no obstante, en clave de un balance político, los resultados no son alentadores para la consolidación de un proyecto político de izquierda. De ese gobierno no parecen desprenderse acumulados perceptibles en términos de organización, movilización y acción política emancipadora de los sectores populares, o aún de profundización de la democracia local. Más que un gobierno alternativo, este gobierno parece haber sido un gobierno de alternancia electoral; da cuenta del caso de esa izquierda que va siendo prefigurada desde el campo de la derecha hacia una “izquierda institucionalizada”, que no representa amenaza alguna para el establecimiento y que acepta desenvolverse en ese terreno.

⁵¹ En el siguiente punto de este trabajo me referiré a la experiencia de esta organización, creada formalmente en noviembre de 2006, que tiene hasta ahora la forma de una amplia confederación de partidos políticos y de organizaciones sociales y populares.

El gobierno de Garzón no fue un gobierno de ruptura con las políticas neoliberales que se venían implantando en la ciudad; en sentido estricto, les dio continuidad, aunque —como ya se dijo— sí produjo algunos cambios de acento. Empero, para ser de izquierda, no es suficiente con hacer énfasis en lo social. De hecho, los partidos de la burguesía han tenido que atender con mayor fuerza las políticas sociales. La teoría económica ha hecho importantes contribuciones en ese sentido; el Banco Mundial ha desplazado sus propuestas de política en escenarios “posliberales” a la lucha contra la pobreza y la desigualdad⁵². La política social de Garzón no logró romper el concepto de financiación basado en la demanda, los subsidios condicionados y los enfoques asistencialistas⁵³. El apego de las políticas sociales de la ciudad al enfoque del derecho de Amartya Sen fue notorio. Desde luego que debe reconocerse la existencia de un marco jurídico institucional del orden nacional que se constituye en un límite objetivo para cambios esenciales de orientación en la conceptualización de la política social. Aquí simplemente se llama la atención sobre la adopción acrítica o con crítica débil de ese marco.

Por tratarse del gobierno de la ciudad capital, se esperaba un mayor protagonismo en el escenario nacional. El gobierno de Garzón marcó diferencias —con un bajo perfil— respecto del gobierno de Uribe en temas centrales del debate nacional como el conflicto armado, el canje humanitario, el desplazamiento forzado y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; la idea de mantener “buenas relaciones” con el gobierno central, en la línea pragmática ya señalada, primó sobre la imperiosa necesidad de adoptar una posición de izquierda que contribuyese a un cambio en la cultura política de la ciudad, signada en buena medida por el “uribismo”, que se ha entronizado —más allá de las clases dominantes— en las capas medias y en sectores populares.

En otros campos, como el de la política económica, no se registraron diferencias de fondo respecto de la política nacional. La política frente a las

⁵² En particular me refiero a los trabajos de Joseph Stiglitz y de Amartya Sen que se han constituido en referentes teóricos del “centroizquierda” colombiano. Véase igualmente: David De Ferranti, Guillermo Perry, et. al., *Inequality in Latin America: Breaking with history?*, Washington, World Bank, 2004.

⁵³ En sentido estricto, no se quebró la fórmula neoliberal actual de disfrute de derechos sociales, que lo reduce a la garantía de coberturas (o de acceso), como “igualdad de oportunidades”. El equipo de Garzón decía apoyarse, no obstante, en un “enfoque integral” de los derechos.

privatizaciones fue ambigua⁵⁴. No se observaron posturas de crítica frente a decisiones de política del orden nacional, que afectaron el entorno de la ciudad⁵⁵; ni se apreció cambio alguno en la concepción de la política fiscal⁵⁶. Desde el inicio, fue clara la alineación con las prescripciones de disciplina fiscal establecidas por el Consenso de Washington como indicadores de manejo económico responsable, no “populista”⁵⁷.

En suma, se puede afirmar que el gobierno de Luis Eduardo Garzón no representó un cambio estable en el balance político y de poder de la ciudad, como para dar continuidad a un proyecto político de izquierda; fue un gobierno que logró mejoras sociales (especialmente en términos de reducción de los niveles de pobreza), sin afectar los privilegios e intereses de las clases dominantes de la ciudad. Se trató de un proyecto político que no logró proyección nacional para convertirse en un referente a seguir; fue un gobierno al que se le definió –desde la derecha– su campo de actuación en la política pública y que aceptó tal definición.

PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA IZQUIERDA. EL CASO DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Con la celebración del Congreso de Unidad del Polo Democrático Alternativo (PDA) durante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2006, se

⁵⁴ Así por ejemplo, mientras que se desistió de las pretensiones de los anteriores gobiernos de la ciudad de privatizar la Empresa de Teléfonos de Bogotá, se entregó el 36 por ciento de la operación del Acueducto a operadores privados (el restante 74 por ciento ya había sido privatizado). *El Tiempo*, viernes 25 de mayo de 2007, pp. 1-10.

⁵⁵ La segunda reforma neoliberal al régimen constitucional de finanzas gubernamentales de 2007, que redujo sensiblemente el ritmo de crecimiento de los recursos a transferir a los gobiernos locales, castigando rubros del gasto social financiados por el gobierno central, es uno de los casos en los que se apreció una tímida oposición y se desaprovechó la oportunidad de contribuir a articular un movimiento nacional contra ese propósito.

⁵⁶ En materia de política tributaria, se reforzó –por ejemplo– un concepto de financiación de obras basado en el impuesto de valorización. El Acuerdo 180 de 2005 permite el recaudo de más de mil millones de dólares para esos efectos. Vale decir que tal impuesto no había prosperado en los anteriores gobiernos de la ciudad.

⁵⁷ El importante aumento de los ingresos de la ciudad –sin afectar la inequitativa estructura de financiación de la ciudad– no sólo posibilitó el aumento del gasto social, sino que garantizó incluso situaciones de superávit (que contribuyeron por cierto a financiar parcialmente el déficit del gobierno central). La ciudad mantuvo su bajo nivel de endeudamiento.

produjo uno de los hechos políticos más importantes en la historia de la izquierda colombiana. Después de décadas de división y fragmentación, el PDA logró aglutinar en un proyecto de unidad de acción política a un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales con diferentes trayectorias históricas y diversos programas políticos, así como con variados entendimientos del significado de la izquierda y de las alternativas al capitalismo en la actualidad. Ese espectro abarca fuerzas que se mueven desde la tradición comunista, socialista y anticapitalista, hasta otras que se inscriben en las trayectorias de la socialdemocracia y de la “tercera vía”. Su trayectoria de desplazamiento va desde la izquierda hacia el centro. Su gran significado consiste en la reserva democrática que representa frente al fortalecimiento y la consolidación de los rasgos autoritarios del régimen político colombiano. Sus posibilidades de constituirse en opción de poder dependerán en buena medida de asuntos que se espera resuelva el proceso de unidad sobre la marcha: el carácter mismo de la organización y el alcance de sus definiciones programáticas.

El proceso que llevó al congreso de unidad⁵⁸ estuvo precedido por el inicio de las conversaciones entre las muy plurales fuerzas de izquierda a principios de 2005 y, sobre todo, por la firma del *Acuerdo político de unidad* a finales de noviembre de ese año por parte del Polo Democrático Independiente (PDI⁵⁹) y por la Alternativa Democrática (AD⁶⁰). Ese acuerdo político posibilitó, posteriormente, la definición de unos acuerdos programáticos mínimos, el *Ideario de unidad*⁶¹, la presentación de listas únicas a las elecciones parlamentarias y la postulación de un candidato único a las elecciones presidenciales de 2006, Carlos Gaviria Díaz, quien obtendría la más alta votación de la izquierda en su historia (23 por ciento del electorado).

⁵⁸ Una descripción y un análisis detallado de ese proceso se encuentra en Jorge Gantiva Silva, “El proceso de unidad y las perspectivas del PDA. ¿Qué izquierda construir?”, en *Revista Espacio Crítico*, núm. 6, 2007, en www.espaciocritico.com.

⁵⁹ Sobre la conformación del PDI, véase la referencia 47.

⁶⁰ Esta fuerza se conformó con base en acuerdos políticos entre el Frente Social y Político (FSP), la Unidad Democrática (UD), el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), el Movimiento Ciudadano y el Partido Comunitario Opción Siete. Alternativa Democrática aglutinó las fuerzas con una mayor definición de izquierda, en un ámbito esencialmente parlamentario.

⁶¹ Véase: “Por una Colombia digna y democrática. Ideario de unidad”, acuerdo suscrito entre el Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática en el momento de la creación del Polo Democrático Alternativo, Bogotá, 25 de febrero de 2006.

Son varios los factores que incidieron sobre el proceso de unidad de la izquierda colombiana en torno al PDA. El PDA aparece en el contexto de la ofensiva generalizada que representa el proyecto de la “seguridad democrática” contra la precaria organización democrática de la sociedad; es expresivo, por tanto, de las luchas políticas por la democratización y el cambio social en Colombia, a la manera de un “acuerdo de voluntades” de las fuerzas políticas que hoy lo conforman y, en ese aspecto, es un proyecto formulado inicialmente “desde arriba” por las élites políticas de izquierda.

Junto con ello deben considerarse otros factores. En primer lugar, se trata de los acumulados del movimiento social y popular, que habían logrado articularse en la lucha contra el referendo fiscal convocado por el presidente Uribe en 2003⁶², y en las luchas contra el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En el mismo sentido, deben tenerse en cuenta diversas experiencias regionales y locales de lucha y resistencia contra las políticas neoliberales. En segundo lugar, la reforma política impuesta en el primer gobierno de Uribe, que implantó el umbral y la cifra repartidora⁶³, le impuso a las fuerzas democráticas y de izquierda (generalmente fragmentadas en los procesos electorales) el imperativo de buscar nuevas formas de agrupamiento. En tercer lugar, se encuentra el movimiento que enfrentó la reforma constitucional que estableció la figura de la reelección presidencial⁶⁴.

A lo anterior se suman, sin duda, los cambios políticos ocurridos en América Latina. Por una parte, debe señalarse el ascenso de la lucha de clases en el

⁶² Con dicho referendo se buscaba de manera expedita reforzar la política de ajuste fiscal (selectivo) neoliberal impuesta en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de diciembre de 2002 para garantizar la “sostenibilidad” de la deuda pública y el financiamiento de la guerra contrainsurgente. El uribismo fue derrotado en ese propósito gracias a la importante movilización social; el presidente se vio obligado a tramitar en el Congreso sus proyectos de reforma.

⁶³ “Se trata de un modelo que suprime el sistema proporcional y establece una doble barrera: la de tener que superar un piso de votación, fijado por ahora en el 2 por ciento, es decir, el llamado umbral; la de someterse a un mecanismo de reparto de los cargos únicamente entre las listas que superan el umbral, mediante un número entero que se aplica sin dar margen a residuos”. Véase: Jaime Caycedo Turriago, “Nuestra presencia en el PDA”, en *Revista Taller*, núm. 15, Bogotá, 2006, p. 35.

⁶⁴ Aunque dicha reforma fue impuesta por las mayorías parlamentarias en torno al presidente Uribe con el propósito de consolidar su proyecto autoritario, los acumulados para el proceso de unidad de la izquierda fueron del mayor significado.

subcontinente: las luchas de resistencia contra el proyecto neoliberal y sus políticas adelantadas por sectores importantes del movimiento social y popular se constituyeron en un referente indiscutible de aliento para la lucha en el espacio colombiano. Por otra parte, el ascenso de gobiernos progresistas y de izquierda puso en evidencia la posibilidad de derrotar electoralmente las fuerzas políticas y económicas que le sirven de sustento al proyecto neoliberal.

Sobre el proceso que dio origen al PDA, Gantiva señala:

“La unidad surgió como una necesidad histórica para romper el *continuum* de la fragmentación y dispersión de las fuerzas democráticas y de izquierda. No respondió, por lo tanto, a la acción premeditada de encumbrados caudillos. Vino de abajo y se asentó gracias a la firme convicción de lograr un acuerdo para la lucha. Evidentemente, fue presionada por la reforma política impuesta por el gobierno de Uribe. Emergió de la necesidad de construir una alternativa democrática a la crisis nacional. Aunque con frecuencia se la consideraba ‘sobrentendida’, la verdad es que fue construida sobre la intencionalidad de ofrecer una respuesta política a la gran batalla por la transformación democrática de Colombia”⁶⁵.

Este proceso del PDA no ha estado y, probablemente, no estará exento de dificultades. La definición del *Ideario de unidad* y la elaboración de listas únicas para las elecciones parlamentarias de 2006 atravesaron momentos difíciles, debido a que se presentaron amagos de ruptura. Sectores minoritarios del PDI se tornaron adversos a la unidad con la izquierda revolucionaria. En la AD había desconfianza frente a sectores del PDI⁶⁶.

Dado el muy amplio espectro de fuerzas políticas que el proyecto aglutina, la lucha ideológica en su interior es una constante. En principio, son identificables dos “corrientes principales” dentro del PDA: una de izquierda revolucionaria, que se inscribe dentro de la tradición comunista, socialista, de la lucha y la acción de masas; otra, del llamado centroizquierda, cuyo ideario se inscribe hoy en el espectro de la socialdemocracia y la “tercera vía”, de lucha y acción principalmente parlamentaria⁶⁷. Las fronteras entre ambas corrientes son difusas y variables; se desplazan cuando se trata del abordaje de temas específicos y sobre todo de la formulación de propuestas de política alternativa. Pese a esa

⁶⁵ Jorge Gantiva Silva, op. cit., p. 4.

⁶⁶ Ibídem, p. 6.

⁶⁷ Las “corrientes principales” no existen formalmente; son heterogéneas en su conformación; representan “coaliciones inestables” dentro del PDA. La composición de la dirección nacional del Polo y de su Comité Ejecutivo sugiere la coexistencia de tales corrientes.

complejidad, para mantener el proyecto ha sido clave el *Ideario de unidad*, la atención de las reglas de juego y la forma responsable como se ha llevado el proceso por parte de las fuerzas políticas involucradas en él; asimismo, el amplio respaldo social y popular que ha tenido esta iniciativa⁶⁸.

De acuerdo con el *Ideario de unidad*, el PDA se declara como una fuerza política que defiende la soberanía y la independencia, apoya los procesos de solidaridad e integración latinoamericana y busca la construcción de un nuevo orden mundial; asimismo, señala que aboga por hacer realidad el Estado social de derecho, impulsar la reforma política democrática, propiciar un nuevo modelo económico sustentado en la democracia económica; igualmente, establece que busca la universalización de los derechos económicos, sociales y culturales en pro del bienestar de la población. El PDA afirma que aboga por una solución política del conflicto armado y el desmonte del paramilitarismo; repudia todas las formas de terror y de terrorismo de Estado; se opone a la concepción de “lucha antiterrorista” de Estados Unidos; busca una política soberana y autónoma contra los estupefacientes y su tráfico; y apoya la lucha democrática de masas. Este *Ideario de unidad* está conformado por siete puntos. Se trata de un programa mínimo consensuado que conjuga elementos liberales sociales y socialdemócratas clásicos, en la conceptualización de la organización jurídica de la sociedad y de los derechos, con postulados de defensa de la soberanía nacional y de organización civilista de la política y de la lucha social, así como de confrontación al modelo neoliberal. Los alcances de estas definiciones programáticas se comprenden mejor si se considera que se trata de un proyecto político diseñado bajo las condiciones de un régimen político autoritario y de una guerra contrainsurgente⁶⁹.

La posibilidad de que el PDA logre consolidarse como una fuerza de izquierda con opción de poder se encuentra a mi juicio en dependencia de algunas definiciones fundamentales que aún no se han producido y cuyo desenlace dependerá en gran medida no sólo de la dinámica interna de esta organización, sino de la misma lucha social y política en Colombia⁷⁰.

⁶⁸ En la elección de delegados al congreso de finales de 2006 participaron más de 500 mil ciudadanos; se eligieron más de 300 delegados. De esa forma se superaron las expectativas de la dirección provisional del PDA que esperaba una participación de 100 mil electores.

⁶⁹ Véase: “Por una Colombia digna...”, op. cit.

⁷⁰ Además de las que aquí se presentan, deben considerarse en todo caso las raíces históricas del pensamiento radical, revolucionario, socialista y comunista de Colombia. Al respecto véase el trabajo de Orlando Fals Borda, “Hacia la democracia radical. Pueblos originarios y valores fundantes”, en *Revista Cepa*, núm. 1, Bogotá, noviembre de 2006.

Un primer aspecto se refiere al carácter del PDA⁷¹: a) ¿Se trata de una coalición de izquierdas con fines electorales, que aspira a desempeñarse en la lógica de la alternancia electoral?; esto es: ¿representará el PDA otra organización para la institucionalización de las reglas de juego de la democracia liberal? En esa dirección presionan no sólo los sectores socialdemócratas y de “tercera vía” del Polo, sino la derecha política y sus intelectuales, que aspiran a definir el campo de la izquierda, como una “izquierda sistémica”, institucionalizada, de validación del régimen político y del proyecto capitalista de acumulación⁷². Sus referentes internacionales se encontrarían en los gobiernos de Lula en Brasil, de Tabaré Vázquez en Uruguay y de Bachelet en Chile, en cuanto se considera que tales proyectos serían una demostración pragmática de cómo se pueden producir transformaciones graduales en las sociedades latinoamericanas sin alterar el marco de la institucionalidad existente; b) ¿Puede ser el PDA una organización social y política para la transformación social y política, democrática de Colombia?, ¿puede erigirse en el futuro en una fuerza anticapitalista del mayor significado? En ese sentido, actúan los sectores provenientes de la izquierda revolucionaria. Sus referentes internacionales se encuentran cercanos al proyecto de Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, además de la reiterada simpatía y reconocimiento a la experiencia cubana. Por lo pronto, como ocurre en general en América Latina, lo que debe esperarse será una cohabitación de esos entendimientos.

Un segundo aspecto, estrechamente ligado con el anterior, tiene que ver con las definiciones programáticas. Mientras que existen posiciones en las que se presenta un cierto menosprecio por tales definiciones, pues se privilegia la acción parlamentaria, hay otras en las que esas definiciones ocupan un lugar central, en la medida en que se constituyen en norte de la organización y la movilización del pueblo trabajador. Por ello, la formulación del *Ideario de unidad* representó un paso inicial de mucha trascendencia. Desarrollos posteriores no se encuentran, por lo pronto, definidos ni previstos. Pero el PDA se verá

⁷¹ Sobre el carácter del PDA véanse los textos de Jaime Caycedo Turriago, “Por una oposición popular con visión de unidad”, de Ricardo Sánchez Ángel, “El plebiscito de la reelección”, y de Orlando Fals Borda, “Carta abierta al PDA. El reforzamiento del nuevo Polo Alternativo”, publicados en *Revista Taller*, núm. 16, Bogotá, abril-junio, 2006.

⁷² Son reiterados los editoriales y los artículos de opinión en los medios de comunicación escritos acerca de la “nueva izquierda”, “responsable”, “democrática”, para oponerla a la “vieja izquierda”, “populista”, “autoritaria”. Véanse, por ejemplo, las columnas de opinión de Eduardo Pizarro Leongómez, en *El Tiempo*, 9 de abril de 2007 y 7 de mayo de 2007.

abocado en algún momento a decisiones sobre la afectación de la (gran) propiedad privada capitalista y la realización de una reforma agraria integral, asuntos por ahora ausentes en su ideario.

En tercer lugar, se encuentra la discusión sobre el tipo de organización que debe tener el PDA. En este aspecto, el problema a resolver empieza por superar el menosprecio por la construcción de una organización permanente. Seguidamente, son varias las formas organizativas que se encuentran en discusión: a) partido en red⁷³; b) federación de partidos; c) partido de tendencias. Y ello no es un mero problema de ingeniería institucional. De momento comparto la caracterización de Caycedo cuando señala que “el PDA ha devenido en una formación compleja, intermedia entre un partido y un movimiento, en cuyo interior convergen partidos y movimientos políticos, de perfil histórico, reagrupamientos recientes y movimientos unitarios que conservan sus identidades”⁷⁴. Todo pareciera indicar que el tipo de organización que se viene construyendo en el PDA asume rasgos similares a los de la experiencia del Frente Amplio uruguayo (en el sentido de albergar bajo una dirección y coordinación política a una amplia gama de partidos, organizaciones y movimientos políticos), aunque se trata –sin duda– de una genuina experiencia colombiana.

Por último, la consolidación del PDA como fuerza política alternativa de izquierda guarda una estrecha relación con la dinámica de la guerra contrain-surgente en Colombia. La solución política negociada del conflicto armado y la búsqueda de acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia, que hacen parte del *Ideario de unidad*, son referentes ineludibles de una política de izquierda en Colombia. Pero no son suficientes. De la misma forma que en otros campos de la política, las miradas desde el PDA hacia la insurgencia armada son disímiles: mientras que hay sectores que consideran que su existencia y accionar afectan las posibilidades de organización y de lucha democrática y civilista, e incluso exigen su condena, otros aprecian en las fuerzas insurgentes un factor de cambio político democrático de gran significado, anclado en un conflicto armado histórico, de carácter social y político. A mi juicio, un proyecto político alternativo de izquierda –en las condiciones colombianas– necesita alimentarse de las más diversas expresiones y tradiciones de organización y lucha popular. Otro asunto es cómo se plantea ese balance en el mo-

⁷³ Véase: Gustavo Petro, “Tesis sobre organización en redes y multitudes”, Bogotá, 2006 (mimeo).

⁷⁴ Jaime Caycedo Turriago, op. cit.

mento político actual. Los proyectos de izquierda no pueden eludir su propia historia (con sus errores y aciertos); la reinención del presente no puede descansar sobre el desconocimiento del pasado.

Un balance de la corta existencia del PDA muestra que ha logrado constituirse en la principal fuerza opositora civil al proyecto de “seguridad democrática” de Uribe Vélez. En el pasado inmediato, con matices y diversos niveles de compromiso por parte de las organizaciones que lo integran, el PDA ha adelantado una importante acción parlamentaria, acompañada de la movilización de masas, en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la reforma al régimen de finanzas intergubernamentales que castiga severamente recursos a transferir a los entes territoriales, destinados a la financiación de la educación y la salud y otros rubros del gasto social. Asimismo, se ha erigido en factor clave de la aceleración de las tendencias a la crisis del régimen político, mediante la denuncia nacional e internacional de sus configuraciones mafiosas y criminales (y paramilitares), exacerbadas y legalizadas durante el gobierno del presidente Uribe Vélez.

Por otra parte, a dos días de realizadas las elecciones de gobiernos locales del 28 de octubre de 2007, los resultados preliminares mostraron avances notorios de esta fuerza política. El Polo logró incrementar su votación para gobernaciones (de 159 mil en 2003 a 658 mil), aumentó el número de diputados (de 14 a 22 en el mismo periodo), obtuvo la gobernación del departamento de Nariño, hizo parte de la coalición que alcanzó las gobernaciones de Atlántico y Santander, apoyó al electo gobernador del Cesar, entre otros, y mejoró sensiblemente su presencia en los concejos municipales. Pese a esos registros, los gobiernos locales y las corporaciones públicas continúan en su gran mayoría en manos de los partidos políticos del entorno del presidente Uribe, algunos de ellos con demostrados vínculos con las organizaciones paramilitares.

Especial atención merecen los resultados de la elección en la ciudad de Bogotá: el candidato del PDA, Samuel Moreno Rojas, llegó a la alcaldía con cerca de un millón de votos y le infringió una derrota aplastante al candidato de Uribe, de la derecha en general, y del gran capital instalado en la ciudad, Enrique Peñalosa; la presencia en el Concejo Distrital mejoró igualmente, pues el número de concejales se incrementó de 8 en 2003 a 11; en las Juntas Administradoras Locales de la ciudad el número de ediles se incrementó de 33 a 61 en el mismo periodo. Estos resultados poseen un mayor alcance si se considera que el presidente Uribe intervino directamente a favor de su candidato y pretendió convertir la elección en un plebiscito en torno a su persona. Salió derrotado.

Estos resultados reafirman —como ocurriera en su momento con Garzón— que en la ciudad se ha venido configurando en forma imperceptible una

nueva subjetividad, cuya potencia podría desplegarse, de lograrse una mayor politización, y si el Polo lograra constituirse efectivamente en un proyecto político de izquierda.

Las elecciones de octubre de 2007 colocaron nuevamente en relieve la complejidad colombiana: al tiempo que se asistió, por una parte, a una institucionalización en el orden regional y local del proyecto político de la derecha uribista, con presencia incluso de organizaciones de fachada del paramilitarismo, son evidentes, por la otra, los signos de erosión del régimen, expresados —en este caso— en los avances del PDA, especialmente en Bogotá, y en la creciente agresividad del presidente y sus subalternos, quienes acentúan sus discursos y sus prácticas autoritarias. Dadas las configuraciones estructurales predominantes del régimen político, sus rasgos mafiosos y criminales, y la misma experiencia histórica colombiana, no es descartable un nuevo ciclo de intensificación de la violencia política contra el PDA y otras formas de organización social y popular. Al mismo tiempo, empero, avanzan y se capturan posiciones en la lucha por la democratización de la sociedad y de la economía.

CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha podido apreciar, pese a que en Colombia no ha habido una práctica de gobierno alternativo o de izquierda del nivel nacional, sí existe una rica experiencia de gobiernos locales, que en todo caso ha sido poco estudiada. Tal experiencia da cuenta de trayectorias específicas muy variadas en su origen, su localización geográfica y sus bases sociales. Las experiencias de “poder popular” se encuentran asociadas con la estrategia político-militar insurgente, particularmente a partir de la década de 1980; los gobiernos locales de la Unión Patriótica tienen como antecedente el proceso de paz adelantado por las FARC con el gobierno de Belisario Betancur y se encuentran asociados con un momento del proceso de descentralización (la elección popular de alcaldes) en la segunda mitad de los años 80; el gobierno del Bloque Social Alternativo se produce en un contexto de crisis de la descentralización neoliberal hacia fines de la década de 1990 y dentro de las pretensiones de recentralización por parte del Estado; el gobierno de Luis Eduardo Garzón en Bogotá se ubica en un contexto de lucha generalizada por la democracia frente a la arremetida del proyecto de “seguridad democrática”. En suma, se trata de experiencias con referentes históricos muy disímiles.

Por otra parte, mientras que las experiencias de “poder popular” y de gobiernos de la Unión Patriótica se presentaron en zonas rurales o semirurales, con fuerte presencia campesina, el caso del gobierno del Bloque Social Alternativo en el Cauca conjuga lo rural y lo urbano, mostrando una composición

social más heterogénea y una fuerte presencia indígena, al tiempo que la experiencia del gobierno de Garzón en Bogotá es la propia de una gran urbe, con la estructura y la diferenciación social y de clase que le caracteriza. La valoración de todas estas experiencias se convierte en un aspecto central para la definición y el entendimiento de un proyecto político alternativo del orden nacional: la historia presente y del futuro es también la historia del pasado.

Pese a las condiciones aparentemente adversas, en términos de la tendencia de la acumulación capitalista (profundización del proyecto neoliberal) y de las configuraciones del régimen político (fortalecimiento del autoritarismo), las posibilidades de la lucha por la democratización en todo sentido de la sociedad colombiana manifiestan actualmente importantes desarrollos. Los evidentes signos de crisis y descomposición del proyecto de la "seguridad democrática" han abierto la opción para proyectos políticos alternativos en Colombia. El Polo Democrático Alternativo puede constituirse en esa opción. Ello dependerá en gran medida de sus propios desarrollos, de cómo sepa interpretar la dinámica de las luchas sociales y de clase, y de los contenidos que le imprima a la organización y a la acción políticas.

Aunque en Colombia pareciera presentarse un "retraso" respecto de otros países de América Latina en términos de la experiencia de un gobierno alternativo o de izquierda del orden nacional, en principio se registran las mismas tendencias de discusión de otros países de América Latina sobre el tipo, los alcances y las posibilidades de proyectos políticos de izquierda. También en Colombia la disyuntiva hacia el futuro parece encontrarse entre proyectos políticos que tienden a una validación de la democracia en escenarios posliberales, a una "institucionalización" del proyecto alternativo, de un lado, y proyectos políticos de ruptura y quiebre institucional, de efectiva transformación democrática radical de la sociedad, en dirección a cambios políticos y sociales más profundos, del otro. Tal disyuntiva no discute en Colombia (aún) la cuestión del socialismo hoy. En todo caso ésta no se define a priori; se encuentra en función de la dinámica del movimiento social y popular, del devenir específico de las luchas en los años que siguen. No se agota en una visión institucionalizada del poder, de "captura" del Estado; se encuentra también en el despliegue de la potencia del poder constituyente, en la producción de poderes contrahegemónicos dentro y fuera de la institucionalidad.

Bogotá, octubre de 2007